

GRECIA

DECRETO DE MOVILIZACIÓN FORZOSA

A mediados de mes, el Gobierno emitió un decreto de movilización forzosa del profesorado para evitar la huelga que amenazaba con llevar a cabo el sindicato de trabajadores de enseñanza secundaria (OLME) a partir del día 17, cuando comienza el periodo de exámenes de selectividad.

El decreto fue publicado el día 12 en el Boletín Oficial del Estado y dicta la “movilización forzosa”, cuyo incumplimiento puede ser condenado hasta con varios meses de cárcel, de todos los profesores de secundaria debido a la «urgente necesidad de prevenir la amenaza» derivada de la decisión de la ejecutiva del sindicato OLME de iniciar el proceso de convocatoria de la huelga.

“El gobierno debe salvaguardar los exámenes de admisión a las universidades que están amenazados de anulación por la decisión de OLME”, declaró a los medios el ministro de Educación Pública, Konstantinos Arvanitópulos.

“El decreto es vergonzoso y horroroso”, declaró a la radio privada Skaï el secretario general del sindicato Zemis Kosyfakis: “No solo prohíbe el derecho de huelga sino también la posibilidad de que pudiese ser declarada”.

«Es una postura dictatorial», fue la reacción del diputado Dimitris Papadimulis, del principal partido opositor, Syriza, que recordó que es la tercera vez en ocho meses que el Gobierno procede a la movilización forzosa de algún sector en huelga.

Con todo, OLME decidió mantener las asambleas de base para decidir sobre su propuesta de huelga a partir del 17 de mayo en protesta por las medidas de austeridad que se les aplicarán, que incluyen aumento de horas lectivas semanales y despido de maestros interinos. OLME es el único sindicato de profesores de enseñanza secundaria y todos los profesores del país tienen derecho a participar en las asambleas, cuyas decisiones son vinculantes, por lo que hasta que las bases no aprueben la convocatoria de huelga decidida por la ejecutiva, ésta no tiene efecto. El sindicato no suele convocar huelgas fácilmente pero cuando lo hace es durante semanas y logra la completa paralización de la Enseñanza Secundaria. Las últimas huelgas en la Educación convocadas por OLME se produjeron en 2006, cuando los profesores la mantuvieron durante 25 días, y en 1997, cuando se prolongó durante 9 semanas, en ambos casos para exigir aumentos salariales y que concluyeron con ciertas concesiones por parte del Gobierno.

Pocos días antes había fracasado la huelga de 24 horas convocada por el sindicato de funcionarios griego (ADEDY), en protesta contra el traslado forzoso de los profesores. Lo ha reconocido el mismo sindicato, cuyo portavoz Vassilis Xenakis, miembro de la ejecutiva, precisó que de entrada no se había contado con una gran participación, pues «es difícil pedir que los funcionarios de cualquier ministerio se sumen a una protesta de otro sector». Para ADEDY, no obstante, era importante «expresar el rotundo rechazo» sindical a la decisión del Gobierno de movilizar forzosamente a los profesores de secundaria.

Paradójicamente, la huelga y la manifestación convocada por ADEDY y por el sindicato comunista PAME, que apenas contó con la participación de varios centenares de personas, no fue apoyada por el sindicato de los profesores. En un comunicado el sindicato de

profesores llegó incluso a acusar a ADEDY de “hacer el juego” al Gobierno del conservador Andonis Samarás por no haber secundado su propuesta de huelga el viernes.

Los profesores de secundaria protestaban contra la decisión del Gobierno de ampliar de 21 a 23 las horas lectivas semanales y de ordenar el traslado forzoso de profesores a zonas donde la red de maestros es deficiente, todo con el objetivo de limitar la contratación adicional de suplentes.

La orden de movilidad forzosa por parte del Gobierno se decretó de modo preventivo, aún antes de que las bases sindicales del profesorado se pronunciasen sobre la convocatoria de huelga propuesta por su cúpula, votación que se llevará a cabo entre hoy y mañana.

El decreto fue justificado por el Gobierno con la “urgente necesidad de prevenir la amenaza” derivada de la decisión de OLME de iniciar el proceso de convocatoria de la huelga.

Esta decisión, aplicada ya este año a los conductores de metro que se habían declarado en huelga, ha desatado un aluvión de protestas, incluso de organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que en un comunicado sostuvo que la orden viola los compromisos internacionales de Grecia en Derechos Humanos.

«Los tiempos de austeridad financiera no absuelven a los Gobiernos de sus obligaciones de respetar todos los Derechos Humanos», señaló AI y agregó que Grecia está comprometida por las leyes internacionales a «respetar y proteger el derecho a la libre asociación, que incluye el derecho a la organización de sindicatos y el derecho a la huelga».